



Informe jurídico 0457/2009

La consulta plantea si resulta conforme con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, que el Ayuntamiento requiera datos personales de los socios de una asociación, como requisito previsto en las bases de la convocatoria de una subvención.

Según se indica en la consulta, la entidad consultante ha seguido el criterio que se señaló por la Agencia Española de Protección de Datos en el informe 0190/2007, cuya fecha es de 26 de abril del 2007, antes de la entrada en vigor de la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de Asociaciones de la Comunidad Valenciana.

Como puede observarse el informe emitido por la Agencia es de fecha de 26 de abril del 2007, y la Ley reguladora de la Asociación en la Comunidad de Valencia es de 2008, de ahí que la Agencia no haya tenido en cuenta el criterio previsto en el artículo 16.2 de la citada Ley, máxime cuando dicha Ley entro en vigor a los cuatro meses de su publicación como señala la Disposición Final Cuarta de la misma.

Una vez efectuada esta matización procederemos a determinar que tipo de datos puede recabar el Ayuntamiento.

Como punto de partida es preciso señalar que la transmisión planteada implica la existencia de una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”

Tal y como indica el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, no sería preciso contar con el consentimiento del afectado en caso de que una norma con rango de Ley habilite la cesión prevista, tal y como dispone el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.

La Ley 14/2008, de 18 de noviembre de Asociaciones de Valencia en su Artículo 16.2 relativo a las obligaciones documentales señala que “A los meros efectos de poder determinar la representatividad de las asociaciones en materia de subvenciones y ayudas públicas, las asociaciones deberán comunicar a las administraciones públicas que lo soliciten a tales efectos, el número actualizado de sus asociados y asociadas, mediante certificación del órgano de la misma que estatutariamente tenga tal facultad atribuida.”

De este modo, para que la cesión fuese conforme a la Ley Orgánica sería necesario que el conocimiento de los datos referidos a los concretos



asociados fuera vinculado a la certificación que el órgano estatutariamente habilitado efectúe concretando el número actualizado de socios.

En conclusión, la cesión a la que se refiere la consulta resultará conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 en caso de que las bases y convocatoria de la subvención establezcan la necesidad de aportar esa certificación a la que hace referencia la Ley 14/2008, de 18 de noviembre.